

Discurso pronunciado por el Dr. José Antonio Ocampo,  
Co-Director del Banco de la República,  
en la ceremonia de grados de la Universidad ICESI,  
Cali, Agosto 26, 2017

Quiero agradecer al Dr. Francisco Piedrahita por la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Entiendo claramente que su invitación a esta ceremonia es también un homenaje a mi padre, quien transformó esta institución casi de un taller en una verdadera universidad, tarea que ha continuado con gran éxito su actual rector. Celebro el avance de la Universidad ICESI a lo largo ya de varias décadas, y su calificación actual como una de las mejores universidades colombianas. Este es, por supuesto, el mejor reconocimiento a la labor de mi padre, que dedicó el grueso de su vida a dos universidades caleñas y a quién la página web de ICESI califica correctamente como un “soñador” en materia educativa.

De todos sus hijos, soy el que heredé el amor por la vida universitaria y por todo lo que ella encarna, en particular la pasión por la búsqueda del conocimiento, la libre expresión y la formación de la juventud en estos mismos valores. Siguiendo su ejemplo, he dedicado casi la mitad de mi vida profesional a la docencia y la investigación universitarias y, gracias a ellas, he tenido muchos hijos e hijas intelectuales cuyos éxitos han enriquecido también mi vida. A mi padre le debo todo esto y coloco, por lo tanto, sobre su tumba una flor del inmenso amor de este hijo universitario.

Cuando él me invitó a pronunciar el discurso de grado de 1993 recordé que había iniciado mis estudios universitarios exactamente un cuarto de siglo antes, en aquel año, 1968, que fue un hito en la rebelión estudiantil, cuando los de París escribieron, entre otros grafitis, aquel que hizo historia: “Prohibido prohibir”. Ese símbolo de rebelión contra el autoritarismo siempre quedó en mi memoria. Con el derrumbamiento del muro de Berlín, ya en 1993 había caído una de las peores expresiones del autoritarismo, pero desafortunadamente esta mala tendencia ha sobrevivido e incluso ha revivido de hecho con fuerza en los últimos años en muchos rincones del mundo.

Hoy quiero recordar, sin embargo, otros aspectos de mi pasado. Hago parte de la generación de colombianos que nació durante el período que se conoce en nuestra historia como La Violencia. Me tocó de niño escuchar sobre sus horrores, especialmente de su degeneración en

varias partes del país en lo que se vino a conocer como el bandolerismo. Aunque logramos superar esta etapa de nuestra historia, recaímos una y otra vez en fenómenos de violencia. Pertenezco así a una generación de colombianos que ha vivido toda su vida bajo una u otra forma de violencia.

Por eso he celebrado todos los esfuerzos que se han realizado desde los años ochenta por restablecer, o más bien establecer la paz en el país, y he lamentado todas sus expresiones y recaídas, algunas de ellas verdaderamente deplorables. Los efectos desafortunados sobre nuestra sociedad, especialmente rural, se han hecho evidentes en los documentos e inventarios que han hecho públicos múltiples analistas, y muy especialmente, nuestro Centro Nacional de Memoria Histórica.

Me cuento, por lo tanto, entre quienes pintaron palomas de la paz bajo la iniciativa del Presidente Betancur con las FARC. Celebré los múltiples éxitos de las negociaciones con grupos rebeldes bajo la Administración Barco y apoyé el movimiento estudiantil que se expresó en la llamada “séptima papeleta” y la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Una de las expresiones más importantes de lo que se logró bajo esos años fue la incorporación a la vida política del M-19, cuya contribución a dicha Asamblea y su participación pacífica en la vida política colombiana con posterioridad debemos recordar hoy. Apoyé también las iniciativas de paz, más tímidas, de las administraciones Gaviria y Samper y la más ambiciosa de la Administración Pastrana. En este último caso, sin embargo, perdí rápidamente la esperanza cuando, muy a comienzos del proceso, a fines de 1998, se presentó el famoso episodio de la silla vacía en el esperado encuentro entre el jefe de Estado y el comandante de las FARC.

También entendí que el fortalecimiento de las fuerzas militares nacionales es un elemento esencial de la transición hacia el monopolio definitivo en el uso legítimo de la fuerza en manos del Estado. A ello contribuí como administrador que fui por unos años de las finanzas públicas nacionales, porque cabe recordar que, aunque dicho fortalecimiento alcanzó su mayor expresión durante las Administraciones Uribe, es un esfuerzo que se ha llevado a cabo por más de un cuarto de siglo, ya que se inició bajo la Administración Gaviria. Por mi apoyo a las fuerzas militares, también lamenté profundamente la forma como algunos segmentos del ejército se

involucraron en la parte sucia de nuestro conflicto interno, tanto por sus alianzas locales con el paramilitarismo como por tal vez su peor expresión, los llamados “falsos positivos”.

Traigo todo esto a colación, no tanto como memoria autobiográfica sino por todo lo que el actual proceso de paz representa para ustedes, estimadas y estimados graduandos, no solo como oportunidad sino, y sobre todo, como responsabilidad. Muchos de ustedes han vivido la historia reciente de nuestros conflictos internos como me tocó en mi niñez y juventud vivir la de La Violencia. Ahora, sin embargo, existe la posibilidad real de que ustedes, así como mis propios hijos y todos mis parientes jóvenes, tengan por fin la oportunidad de vivir en un país en paz, e incluso para que mi esposa, mis hermanos y yo, tengamos la oportunidad de vivir los últimos años de nuestras vidas y de morir en un país en paz. Aportar a este proceso es, por lo tanto, la gran responsabilidad que recae sobre ustedes.

Por este motivo he apoyado el proceso de paz de la Administración Santos y no he podido entender la polarización que ha generado. Más aún, como residente en el exterior que fui hasta hace pocos meses y por mi estrecha asociación con las Naciones Unidas a lo largo ya de dos décadas, confieso que desde afuera del país no se entiende esa polarización y, más bien, se ve el proceso de paz de Colombia como uno de los pocos éxitos en su género a nivel mundial.

Los riesgos de este proceso son, sin duda, inmensos. El primero y principal es que la polarización impida la reconciliación y la convivencia, tanto a nivel nacional como en las zonas de conflicto, ya que la reconciliación es la esencia de la construcción de paz, la tarea más importante que tenemos por delante. A nivel nacional, ello exige, por supuesto, que las FARC participen en la vida política con respeto a nuestras instituciones, e incluso ayuden a transformarlas en un sentido positivo, como en su momento lo hizo el M-19. Y, por supuesto, exige que las negociaciones con el ELN culminen exitosamente, y dicho grupo se incorpore también a la vida política como un movimiento pacífico respetuoso de las instituciones.

Un elemento esencial de todo este proceso es, por supuesto, garantizar que el Estado ocupe las zonas que fueron el epicentro de la violencia para implantar en ellas el monopolio del uso legítimo de la fuerza, y evitar que nuevas formas de violencia sustituyan las anteriores. Aún más, es esencial que se instale definitivamente en esas zonas del país nuestras instituciones de justicia y que se garantice su desarrollo económico y social.

En torno a este último tema, sobre el cual quiero detenerme, déjenme decir con toda claridad que la esencia de la construcción de paz es un gran salto en materia de desarrollo rural. En pocas palabras, la paz tiene rostro rural. Esto es cierto, en particular, en relación con las zonas más atrasadas del país, muchas de las cuales nunca hicieron el tránsito al siglo XX y ahora deben hacerlo al siglo XXI. Esto exige una gran estrategia de reducción de las brechas rural-urbanas en materia social, así como una mejoría significativa de las oportunidades económicas de los pequeños agricultores, lo que en la terminología de la FAO se denomina hoy la agricultura familiar.

Este objetivo quedó incorporado en el punto 1 del acuerdo de paz, bajo el nombre de reforma rural integral. Fue también objeto de atención de la Misión para la Transformación del Campo que convocó el gobierno y que tuve la oportunidad de dirigir. Debo decir que llevar a cabo la suma de las propuestas incorporadas en uno y otro documento representa uno de los retos históricos más importantes del país.

Lo que esto implica en materia productiva es, en primer término, una acción ambiciosa para darle acceso a la tierra a los campesinos que carecen de ella y formalizar la propiedad rural a través de un programa masivo que se lleve a cabo a lo largo y ancho del país, ya que el 60% de quienes hoy tienen posesión de sus tierras carecen de títulos formales de propiedad. Más aún, este proceso es incluso necesario para que el Estado tenga un inventario correcto de cuántas tierras siguen siendo aún baldíos, inventario con el cual no cuenta hoy en día y con el cual es esencial contar para alimentar el Fondo de Tierras que requiere el cumplimiento del acuerdo de paz.

Más allá de ello, se necesita una estrategia integral para promover la agricultura familiar, que incluya, aparte de acceso a la tierra, lo que en la Misión denominamos acompañamiento integral, que debe incluir la asistencia técnica, así como la acumulación de capacidades empresariales y de conocimiento de los mercados. Dicha estrategia debe incluir también acceso al crédito y apoyar las cadenas de comercialización para asegurar que los pequeños agricultores tengan buen acceso al mercado, ya sea a través de formas asociativas propias o de conexiones equitativas con sectores empresariales y compradores en el exterior. Todo esto no será posible

sino a través de promover la asociatividad de los agricultores familiares, a través de cooperativas u otras formas de asociación.

El apoyo a la agricultura familiar debe estar acompañado de una promoción más amplia del sector agrícola, incluyendo la agricultura empresarial y la de tamaño mediano. Y esta depende, a su vez, de grandes programas de promoción de inversiones en el campo, de un impulso en gran escala del sistema de tecnología y formación de capital humano para el sector. Requiere igualmente del buen funcionamiento del sistema de crédito agropecuario, de una tasa de cambio competitiva y de mecanismos apropiados de promoción de nuevas exportaciones agropecuarias y de defensa comercial.

Un elemento complementario y decisivo, como lo afirmó el Presidente de la SAC en un debate reciente, es mejorar significativamente toda la red de comercialización de productos agropecuarios. Por eso en la Misión propusimos que, aparte de sus actividades como entidad crediticia, FINAGRO también invierta con el sector privado en nuevas empresas de comercialización de productos agropecuarios, incluyendo empresas exportadoras, y en redes de almacenamiento y de fríos.

El fomento de la asociatividad, al cual me referí en relación con la agricultura familiar, es también relevante para medianos y grandes agricultores y especialmente necesaria para la investigación y difusión de tecnología tanto de producción como de procesamiento y transporte de los productos agrícolas, como la comercialización de sus productos.

Todo esto se necesita para transformar a Colombia en una de las despensas alimentarias del mundo, como bien lo ha destacado la FAO. Y soy consciente que lo digo en la región líder de Colombia en materia agropecuaria, donde debemos dar, sin embargo, el salto del exitoso desarrollo de la caña de azúcar hacia la conversión de esta región en líder en nuevos productos agropecuarios para el mercado interno y externo, notablemente, en nuestro caso, de frutas.

Las inversiones que se requieren para dar este salto en materia de desarrollo rural no son, por lo demás, cuantiosas. La Misión las estimó en unos \$13 billones por año, que representa solo un poco más de un punto porcentual del ingreso del país, de los cuales aproximadamente la mitad se podrían obtener de la reasignación de recursos existentes. Esta suma es consistente,

además, con los montos que el gobierno estimó recientemente que necesitaba para el postconflicto. Por eso, la restricción más importante es la capacidad de ejecución, que requiere poner a plena marcha las tres nuevas agencias creadas para el desarrollo rural: la Agencia Nacional de Tierras, la de Desarrollo Rural y la de Renovación del Territorio. Y exige consolidar las previamente existentes, así como el concurso de los gobiernos departamentales y municipales y de la nutrida red de asociaciones gremiales del sector.

Estimadas y estimados graduandos

La transición a una Colombia en paz requiere de muchos otros ingredientes. En este sentido, quisiera mencionar, aunque solo sea de paso, la necesidad de reconstruir nuestro sistema político, caracterizado por la destrucción virtual de los viejos partidos sin la formación adecuada de nuevos, así como de la presencia, ya francamente descarada, no solo de las prácticas clientelistas del pasado sino de una abierta corrupción. Y la evidencia reciente de esta última práctica ha contaminado ya las más altas esferas de nuestro sistema judicial y a la fiscalía. Nos debe dar vergüenza como nación. Celebro, por supuesto, que nuestro sistema haya comenzado a combatir esta epidemia, y debemos exigir que lo haga con total firmeza.

Quisiera detenerme, sin embargo, en un elemento adicional de la Colombia en paz que espero que ustedes ayuden a construir y que se relaciona estrechamente con las reflexiones que les he presentado sobre el desarrollo rural: la superación de nuestras inmensas desigualdades sociales. Las enormes desigualdades son otro de los elementos que nos deben hacer sentir vergüenza como nación. Aunque hay muchas dimensiones de este problema, incluyendo las étnicas y las de género, déjenme concentrarme en las de ingreso y la riqueza, con las cuales estoy más familiarizado.

Como se sabe muy bien, América Latina tiene, conjuntamente con África al sur del Sahara las peores distribuciones de ingreso del mundo. Pero al interior de nuestra región, competimos con Guatemala, Honduras y Paraguay por tener los peores niveles de distribución de ingresos de la región. Bolivia y Brasil nos superaban en este campo, pero ahora están en una situación igual o mejor que nosotros. Además, aunque hemos mejorado un poco en los últimos años, los índices correspondientes (especialmente el llamado índice de Gini) se encuentran todavía por encima de los registros de 1980 o 1990, que eran ya malos entonces. El índice de

Palma, que es más fácil de comprender, indica que en Colombia el ingreso del 10% más rico supera cuatro veces el del 40% más pobre, el peor indicador de América Latina después de los de Honduras y Paraguay. Es, además, el doble de los de Argentina y Uruguay y cuatro veces el que es normal en los países europeos con una buena distribución del ingreso.

Las encuestas con las cuales se estiman estos indicadores no captan muy bien los ingresos de los más ricos. Por eso, la medida alternativa que se ha venido utilizando cada vez más es el ingreso del 1% más rico de los hogares, estimado generalmente con declaraciones de renta. Este indicador señala que en Colombia el 1% más rico concentra el 21% del ingreso total. Esta es, nuevamente, uno de los peores indicadores del mundo para los países para los cuales se ha estimado. Cabe agregar que los indicadores que existen sobre la distribución de la propiedad rural y de otras formas de riqueza son peores que los de la distribución del ingreso.

El combate a la desigualdad debe ocupar, por lo tanto, un lugar privilegiado en la construcción de paz. Los instrumentos para hacerlo exigen la acción redistributiva del Estado y por ello más gasto público social y un sistema tributario más amplio y más redistributivo. Es cierto que el gasto público ha ganado peso dentro de nuestra economía, tanto durante los años posteriores a la Constitución de 1991 como durante el auge petrolero que terminó en 2014. Pero aun así sigue estando por debajo del promedio latinoamericano y muy distante de los niveles de los países desarrollados miembros de la OCDE.

Lo mismo acontece con los ingresos tributarios, que también están por debajo de los promedios de América Latina y la OCDE. Y esto es pese a la frecuencia de reformas tributarias que ha caracterizado al país. Lo que acontece es llana y simplemente que esta secuencia de reformas ha dejado un sistema en el cual las personas de altos ingresos pagan muy pocos impuestos como personas naturales. Las personas jurídicas están sujetas a tasas de tributación más altas y sin duda su nivel básico debe reducirse para hacer más competitivo el país, pero el régimen correspondiente está plagado de beneficios específicos que será necesario eliminar más temprano que tarde. Las reformas nunca han logrado atacar a fondo estos problemas, por lo cual deberán continuar ocupando un papel importante en la agenda pública del próximo gobierno.

De acuerdo con las investigaciones que se han realizado a nivel latinoamericano, la educación es el instrumento más importante para mejorar la distribución del ingreso. Esto

significa no solo acceso a la educación, algo en lo que sin duda hemos avanzado, sino también buena calidad, algo en lo que hemos avanzado bastante menos. Así se refleja en las pruebas PISA de la OCDE, donde hemos avanzado en todos los campos (lectura, matemáticas y ciencias), pero estamos todavía muy por debajo de los promedios de la OCDE por debajo de algunos países de América Latina, especialmente de Chile, Uruguay y Costa Rica. Además, los análisis realizados con estos datos muestran que el bajo rendimiento en estas pruebas está asociado al estrato socio-económico de los estudiantes.

La mejora en la calidad de la educación debe ser, por lo tanto, un objetivo esencial de la política pública colombiana, y especialmente la mejora en la calidad de la educación de los sectores de más bajos ingresos. Un elemento esencial de ello, que se relaciona con mis anotaciones sobre el mundo rural, es la reducción significativa en las brechas rural-urbanas, tanto en términos de acceso como de calidad. Para lograr esto último es necesario seguir desarrollando instrumentos específicos para la educación rural, como lo ha sido en nuestro país Escuela Nueva. El esfuerzo para mejorar la calidad de la educación primaria debe enfocarse, ante todo, en el sistema público. En el caso de la educación universitaria, donde el peso de la educación privada es mayor, debe incluir también mecanismos para dar a los sectores de más bajos ingresos acceso a la educación privada de calidad.

Uno de los resultados más positivos que surge de las investigaciones académicas recientes, y muy especialmente de la que ha realizado el Fondo Monetario Internacional, es que la mejor distribución del ingreso tiene efectos positivos sobre el crecimiento económico y que las acciones redistributivas del Estado no tienen impactos negativos en tal sentido. Por lo tanto, el crecimiento económico más dinámico y la buena distribución son objetivos complementarios y no antagónicos de la política pública.

Estimadas y estimados graduandos

En homenaje a mi padre, a quien ustedes deben en parte la posibilidad que tuvieron de estudiar en un centro universitario de alta calidad, quería dejarle estas reflexiones. Ustedes tienen la oportunidad de vivir en un país en paz, oportunidad que se le negó a mi generación. Pero eso también significa responsabilidad. Será, por lo tanto, su tarea ayudar a construir un país en paz y más equitativo. Esta es una tarea que les compete en sus propias familias y comunidades, así



como en las empresas donde trabajen y en la vida política, a aquellos que se dediquen a la vida pública, pero a todos también como ciudadanos.

Los felicito por el logro que significa para ustedes y sus familias el terminar los estudios universitarios y les deseo los mayores éxitos en la nueva fase de la vida que inician.